

Caudillos y Militares EN LA EVOLUCION HISPANOAMERICANA

MAGNUS MORNER

I

Es un hecho conocido que durante el siglo XIX la revolución armada llegó a ser, se podría decir, una tradición dentro de la política latinoamericana. Pero en la mayoría de los casos estos golpes generalmente no muy sangrientos, en caso de tener éxito no han significado sino un mero cambio de carácter personal en cuanto a los puestos políticos principales. Pero para efectuar semejantes cambios más o menos rutinarios —realizados en países más tranquilos a través de votaciones parlamentarias o consultas dentro del mismo círculo de gobierno— exige la misma técnica revolucionaria. Esto quiere decir que existen entidades militares cuyos oficiales pueden tener suficiente interés personal en un cambio político para tomar la iniciativa. Lógicamente es un hecho que generales y coroneles siempre han ocupado un porcentaje significativamente importante de los puestos más elevados como el de Presidente o el de Ministro dentro de la vida política de las naciones latinoamericanas. La Junta Militar ha llegado a ofrecer muchas veces la versión típicamente latinoamericana de un gobierno provisional y una forma transitoria antes de establecerse una dictadura personal.

¿Pero cuál es el origen de esta tradición violenta de la política interior y cómo se han cambiado las condiciones básicas para el militarismo en América Latina?

Para empezar podría parecer muy natural una referencia a la Conquista española de América, proceso desde luego muy sangriento. Los conquistadores, Cortés, Pizarro y otros, recibieron sus altos cargos administrativos en los territorios conquistados por ellos mismos, precisamente a raíz de sus hazañas militares. Pero en realidad es un hecho más significativo el que los conquistadores fueran sustituidos, en una época muy temprana, por administradores civiles enviados a América por la Corona. Como es conocido temía la Corona que un caudillo militar victorioso construyera en un territorio lejano un poderío personal extraordinario, prefiriendo por lo tanto que los cargos más elevados fueran ocupados por cortesanos pertenecientes a la alta nobleza o por juristas sabios, categorías éstas en cuya lealtad y subordinación se podía fiar enteramente. Aunque también es cierto que los cargos de gobernadores de provincias recayeron muchas veces en veteranos aguerridos de Flandes y de Italia, lo que importa en esta conexión es el hecho de que fueran enteramente incluidos dentro de la administración civil y de que sus períodos administrativos fueran generalmente breves.

En realidad el largo período desde alrededor de 1550 hasta 1810, es en Hispanoamérica, lo mismo que en el Brasil, una época caracterizada sobre todo por ideales pacíficos y por una administración burocrática y civil. Es algo independiente de que siempre existiera en las

colonias españolas y portuguesas la amenaza de una invasión extranjera o de una rebelión indígena o de esclavos. Dado que las pocas tropas regulares disponibles no eran suficientes más que para reclutar las guarniciones necesarias, los habitantes de las poblaciones españolas y portuguesas costaneras tuvieron que tomar, muchas veces, las armas para tratar de defenderse contra filibusteros y otras expediciones navales extranjeras. En otras partes, en el interior, las luchas con los indios salvajes constituían un fenómeno casi tan cotidiano como para los colonos de las películas norteamericanas de "Wild West". Pero durante mucho tiempo la organización de milicias siguió teniendo un carácter muy provisorio. Cuando los títulos militares abundan en la documentación inédita de la época, es un fenómeno más bien relacionado con la escasez financiera de la Corona y no con una abundancia de verdaderos oficiales militares porque, durante la época colonial, casi todos los cargos importantes, sean de carácter civil, eclesiástico o militar, fueron en la práctica reservados para los peninsulares. Los criollos americanos, en cambio, tuvieron que contentarse con la posición social que pudieron alcanzar a raíz de su abo-lengo o de su posición económica. Pero la situación financiera de la Corona fue siempre precaria, razón por la que se vendieron cargos y títulos en escala sumamente considerable.

De esta manera, también comerciantes y terratenientes bastante pacíficos pudieron satisfacer su vanidad con la adquisición de algún título muy marcial, pero sin mucha significación real. Por lo tanto el origen de uno, por lo menos, de los ingredientes del militarismo latinoamericano, la vanidad de ostentar, títulos altisonantes, se podría situar en el siglo XVII. En nuestros días podemos ver, por ejemplo, cómo en la República Dominicana puede haber hasta dos personas ostentando el título extraordinario de Generalísimo.

Abarcaban también las reformas borbónicas de la segunda mitad del siglo XVIII en Hispanoamérica una reorganización y un aumento considerable de la defensa colonial. Al mismo tiempo que incrementaron las tropas regulares, las milicias también recibieron una organización mucho más estable que antes, en parte con la ayuda de pequeños cuadros de oficiales y de soldados regulares. En el año 1800 había por ejemplo en la Nueva España una fuerza de defensa constituida por 6,150 hombres pertenecientes a tropas regulares y alrededor de 24,000 hombres organizados en diferentes cuerpos de milicias. Es importante observar que los miembros de las Fuerzas Armadas, súbitamente aumentadas, de acuerdo con las condiciones existentes y prescritas en España a partir de fines del siglo XVI, gozaron de ciertos privilegios de naturaleza jurídica, el llamado Fuero Militar. To-

dos, sean militares de profesión o no, procuraban que todos los pleitos en los cuales figuraban, fuesen sometidos a los juicios de las Cortes Militares, en los cuales solían influir sentimientos de solidaridad militar.

De esta manera la casta militar llegó a ser superior a los demás elementos de la sociedad y pudo obtener privilegios excepcionales dentro del Estado de justicia que había sido construido y mantenido a lo largo de dos siglos de administración civil española.

Esto fue un precedente peligroso para las Fuerzas Armadas en los nuevos estados nacidos a raíz de las largas guerras de Emancipación. No fue posible para las administraciones estatales, más o menos improvisadas, imponer su autoridad sobre las tropas y los generales victoriosos que habían creado la misma base de la Soberanía Nacional. Declaró abiertamente el prócer argentino general José de San Martín que la presencia de un soldado victorioso tiene que ser peligrosa para estados de reciente creación y consecuentemente, de manera verdaderamente noble, se retiró de la política. Pero la mayoría de sus colegas, en cambio, se aprovecharon cínicamente de la situación creada al haber recibido la administración civil y por lo tanto el poder estatal, un rudo golpe a raíz de la revolución política.

A consecuencia de las largas campañas de las guerras de Emancipación culminando en batallas gloriosas y sangrientas, surgió un nimbo heroico alrededor de todo lo militar, el cual ha mostrado una vitalidad sorprendente. En realidad las guerras que estallaron entre los diferentes países americanos durante el resto del siglo XIX eran sorprendentemente pocas. Además de la guerra de 1846/48 entre México y los Estados Unidos, los únicos

conflictos de mayor alcance fueron la Guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay, de 1865 a 1870, y la guerra del Salitre entre Chile, Bolivia y el Perú en 1879. Durante el siglo XX la América Latina ofrece un panorama todavía más pacífico, especialmente si se compara con el resto del mundo. Al lado de algunas campañas fronterizas de menor alcance, no hay más que la Guerra del Chaco entre el Paraguay y Bolivia que deba ser digna de mencionarse en esta conexión. La participación de los países latinoamericanos en la Segunda Guerra Mundial no tuvo como efecto ninguna acción militar salvo la actuación de una fuerza expedicionaria brasileña en Italia y de unas entidades aéreas mexicanas en el Pacífico. En cuanto a la guerra de Corea sólo Colombia envió allí alguna tropa. Es un hecho que hasta el día de hoy la distancia geográfica entre la América Latina y los focos de alarma de la política internacional y los poderes más agresivos la han puesto a salvo de intervenciones militares extra-continetales más serias con sólo algunas excepciones. Durante el período nacional, primero la marina de Gran Bretaña, después la protección cada vez más poderosa aunque no precisamente desinteresada, de los Estados Unidos, han constituido una barrera bastante eficaz contra otros grandes poderes más agresivos. Desde hace ya mucho tiempo ha sido por otra parte imposible para los países latinoamericanos, aunque aliados, pensar en que pudieran ofrecer una defensa militar eficaz contra los Estados Unidos, idea, por lo demás, puramente hipotética. Al mismo tiempo es un hecho el que la organización de seguridad inter-americana cada vez mejor elaborada con la ayuda de los Estados Unidos, ha llegado a reducir en alto grado los riesgos en cuanto a conflictos futuros entre países latinoamericanos.

II

A raíz de lo que antecede es evidente que no haya una correlación entre el militarismo latino-americano y una política exterior de carácter agresivo. No se trata de una esperanza de conquistar laureles guerreros en lucha contra enemigos extranjeros. Los generales latinoamericanos han solido estar satisfechos con la gloria heroica heredada de la época cada vez más lejana de las guerras de Emancipación. La posición predominante de las Fuerzas Armadas no tiene, por lo tanto, una base en la política exterior sino en la política interior. En la ausencia de otros elementos constitutivos en las nuevas Repúblicas el poderío político no pudo sino caer en las manos del ejército y de los grandes terratenientes generalmente aliados con aquél, cualquiera que fuese la intención de las constituciones políticas, generalmente tan benévolas como ilusorias. Lo mismo que un terrateniente pudo decidir todo en su hacienda y tal vez en su distrito con su propia autoridad y con amenaza de castigos severos, un general poderoso pudo decidir todo en una provincia o un país entero. Durante la anarquía sangrienta, surgida en muchas partes a raíz de las guerras de Emancipación, el individualismo arisco, casi brutal que según se dice es propio de los pueblos ibéricos, había sido en alto grado fomentado. Es verdad que, a consecuencia de las guerras napoleónicas, en la misma España nació un tipo de déspota militar, el cual es muy parecido al caudillo hispano-americano. A veces estos cau-

dillos ejercieron su poder de una manera más o menos indirecta y sutil, pero en otros casos sus maneras de gran señor lo mismo que la denigración de la representación parlamentaria y de las autoridades civiles, constituyen un testimonio elocuente de la naturaleza del régimen. Huelga decir que un caudillo semejante y lleno de ambición no se retiró más que a favor de algún competidor cuyos argumentos en forma de bayonetas fueron todavía más eficaces. Por lo tanto, las revoluciones armadas y los golpes de estado llegaron a ser fenómenos normales naturalmente mejor organizados por especialistas profesionales o sea por los militares. Para estos militares la insubordinación y el rompimiento de la jura de fidelidad llegaron a ser tan frecuentes que, en caso de éxito, eran presentados como actos enteramente legítimos. Lo mismo que en la Roma de los emperadores militares, casi cada capital hispano-americana tenía su guardia de pretorianos fácilmente descontentos e inconstantes. No todos los caudillos eran generales. El lúgubre déspota paraguayo Dr. Francia, por ejemplo, era un abogado, pero la gran mayoría de ellos pertenecían a la casta militar y todo sin excepción se apoyaron en la fuerza de las bayonetas. En el Perú, como es conocido, fueron los veteranos de la batalla de Ayacucho los que reclutaron los presidentes hasta el año 1872 cuando subió al poder allí un presidente civil. Muchos de todos estos presidentes-generales hispano-americanos eran hombres capaces y fa-

lentos, algunos muy bien intencionados y honrados, pero otros en cambio, incapaces y crueles. Todos contribuyeron, sin embargo, como es natural, a que el tono de mando fuera la voz natural del Estado. Un caudillo centro-americano de la época de la Federación dio una definición magnífica de la realidad política de su tiempo al declarar: "No hay ley, no hay constitución, no hay propiedad. No hay más ley que lo que yo mando. En mí residen todas las facultades de un supremo dictador."

Es verdad que durante la segunda parte del siglo XIX caracterizada por una expansión económica impresionante, los caudillos puros desaparecieron uno tras otro. En Chile ya habían sido sustituidos por una oligarquía terrateniente durante los primeros años de la década de 1830 y se instaló allí un régimen también de hecho constitucional. En Argentina, el último caudillo en el nivel nacional, Urquiza, cayó en 1861 y los últimos caudillos en el nivel provincial desaparecieron unos diez años más tarde. Hasta un país como Bolivia que había tenido que sufrir las expresiones más brutales y bárbaras del despotismo militar, obtuvo al fin del siglo un régimen civil y relativamente progresista. En el Perú, la reacción de los elementos civiles contra el gobierno militar tuvo un carácter de principio tan marcado que se dio el nombre de "civilista" al partido llegado al poder en 1872. En el Brasil, durante mucho tiempo, el gobierno imperial supo felizmente imponer su autoridad sobre los generales, pero a raíz del triunfo alcanzado sobre el Paraguay en 1870, el aplomo de los jefes militares creció continuamente, y en 1889 forzaron la abdicación del Emperador. Pero el gobierno abiertamente militar de los primeros años de la república en el Brasil fue un fracaso y pronto elementos civiles recuperaron la dirección política del Estado. En el Uruguay, que hasta entonces había sido una república extraordinariamente intranquila, el último caudillo militar, Saravia, desapareció de la escena en 1904. Francisco García Calderón, el ensayista peruano, cuyo libro sobre la evolución de la América La-

tina en 1912 alcanzó a tantos lectores europeos y latino-americanos, creía que, en cuanto a la América Latina, se podía hablar de los caudillos y del militarismo más bien en forma de imperfecto. Según García Calderón, los capitalistas estaban para ocupar los puestos de los generales en el juego político.

En el curso de la segunda parte del siglo XIX también se efectuó una transformación de la ciencia militar y de la posición social de los militares. Durante los tiempos anteriores hubo siempre entre los muchos jefes militares un elemento pintoresco de generales auto-nombrados, líderes de huestes de caballería irregular y de bandas de salteadores. También había sido costumbre que muchas personalidades poderosas más bien civiles recibieran el trato de general solamente como reconocimiento adulador de su poderío. Pero ahora las academias militares se hicieron el punto de partida más o menos obligatorio para la carrera militar e instructores extranjeros contribuyeron a proporcionar a los cadetes toda la disciplina y los conocimientos teóricos exigidos por la guerra moderna. De esta manera la casta militar fue estrictamente separada de las demás capas de la sociedad, mucho más que antes. Poco a poco, aunque en ritmo más lento, se han cambiado también las formas del reclutamiento y las condiciones de los soldados. De una manera u otra, las formas de reclutamiento que antes habían sido caracterizadas por una completa arbitrariedad y crueldad fueron puestas en relación con el principio del servicio militar obligatorio, aunque también es verdad que esta obligación en América Latina generalmente afecta sólo a las capas humildes. La gente acomodada ha podido comprar su exención.

Gracias a una disciplina mejor, una dirección mejor y armas modernas, a partir del siglo XX, hasta un contingente militar pequeño pudo fácilmente tener en jaque masas populares armadas y numerosas. Consecuentemente sólo revoluciones efectuadas por estos mismos contingentes militares pudieron tener una esperanza de éxito final.

III

Bajo el impacto de los cambios conyunturales internacionales y de un mercado mundial inseguro a partir de los años de la década de 1920, país tras país en América Latina sufrió crisis económicas agudas, las cuales a su vez provocaron la caída más o menos inmediata de los regímenes políticos, fueran conservadores, fueran liberales. Fue en ese momento cuando la nueva generación de oficiales militares profesionales vio su posibilidad de intervenir, lo que también pudo presentarse para ellos como un deber. Mientras que por ejemplo el dictador militar argentino, Uriburu, era un conservador apoyado por la oligarquía terrateniente, fueron en otros países unas tendencias radicales las que se apoderaron del poder con los jóvenes oficiales ambiciosos. A comienzos de la década de 1930 fueron gobiernos civiles en el Paraguay y en Bolivia respectivamente los que precipitaron a estos dos países en la guerra sangrienta y poco justificada del Gran Chaco, pero al acabar la guerra fueron veteranos desilusionados y reformistas los que se incautaron del poder político en ambos países. Seguramente muchos militares latino-americanos habían sido influen-

ciados por el espíritu prusiano representado por los instructores militares alemanes. Pero también habían absorbido diversos argumentos teóricos justificando el militarismo que había sido divulgado por ciertos escritores franceses. Después de la primera guerra mundial influencias comunistas y fascistas comenzaron también su infiltración en los círculos de militares jóvenes. En el Brasil un joven subalterno llamado Prestes iba a ser el caudillo indisputable de los comunistas. En Argentina, Perón empréstó todo lo que necesitaba para su ideología reformista confusa del dictador italiano. En algunos países, este militarismo de modelo moderno distanció a las Fuerzas Armadas de su aliado tradicional, la oligarquía terrateniente. En las huellas de la Segunda Guerra Mundial se establecieron en varios países latino-americanos regímenes civiles y populares de tendencia izquierdista, pero bastante pronto, y por lo menos en parte, a consecuencia de su incapacidad para mantener el orden interior, cayeron víctimas de las intrigas de los líderes militares ambiciosos. Fue por métodos ilegales de diversa naturaleza como Odría conquistó el poder en el Perú,

Rojas Pinilla lo hizo en Colombia, Pérez Jiménez en Venezuela, y Batista en Cuba. Protegidos por coyunturas económicas favorables, parecían tan seguros en su posición como ciertos caudillos del tipo tradicional habían sido antaño, pero durante los últimos años se ha efectuado como se sabe, un cambio muy brusco y completamente inesperado por la mayoría de los observadores políticos, o sea que estos cuatro dictadores, lo mismo que su Néstor, Perón, han sido derrocados. Y no solamente esto. El fenómeno más interesante ha sido precisamente que las juntas y los líderes militares que derrocaron a los dictadores en Argentina, en Colombia, y en Venezuela, después de algún período de transición dejaron al pueblo elegir libremente el nuevo régimen político del país. De manera semejante, fue una intervención militar lo que en el Brasil garantizó que el presidente Kubitschek pudiera ocupar su puesto. Es natural que no se sepa todavía si la salida de los militares de la escena política será definitiva o de larga duración o si solamente se tra-

ta de un período transitorio. Esto dependerá naturalmente en alto grado de la capacidad de los nuevos regímenes en cuanto a solucionar los problemas urgentes que tienen que enfrentar.

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que los altos jefes militares siempre han tenido otras posibilidades también de influenciar la política del país sin golpes militares y sin ocupar ellos mismos la jefatura del Estado. Pero es mucho más difícil observar y analizar esta actuación militar realizada entre los bastidores de la política. En todo caso es un hecho seguro el que los votos emitidos por el Ministerio de la Defensa o por el Jefe del Ejército generalmente tienen un peso extraordinario en las consultas de la alta política. Durante los tiempos anteriores, los ministros de defensa casi siempre han sido generales, pero durante los últimos años han sido elementos civiles los que en muchos países han llegado a ocupar puesto llave.

IV

Hemos subrayado ya que la función tradicional de las fuerzas armadas en Europa o sea el garantizar la seguridad exterior de la Nación o el posibilitar una política exterior agresiva, no es la función más esencial en lo que a América Latina se refiere. En cambio la función principal de las fuerzas armadas es en América Latina la de mantener el orden interior, este orden que al mismo tiempo ha sido tantas veces perturbado por los militares mismos. La dictadura militar muchas veces ha llegado a parecer la forma ideal para asegurar el mantenimiento del orden interior no solamente bajo el punto de vista de los militares mismos sino también para el de los otros sectores influyentes de la sociedad. Al ocupar los estadounidenses hace unos cuarenta años Haití, República Dominicana, y Nicaragua eran tan ingenuos que creían que se podían combinar democracia y buen orden en estas pequeñas repúblicas intranquilas, sólo con que los ejércitos fueran substituídos por cuerpos de gendarmería. Pero al marcharse los norte-americanos fue precisamente en estos gendarmes bien entrenados y gracias a la ayuda norte-americana, bien armados, en los que recayó automáticamente el poder político. En el día de hoy, un ex-jefe de gendarmería, Trujillo, sigue siendo el déspota todopoderoso de la República Dominicana. En Panamá ha sido siempre la policía la que ha representado allí el militarismo. Al efectuarse la revolución boliviana en 1952, las tropas policiales constituyeron un elemento importante dentro del partido triunfante, pero para mayor seguridad los trabajadores y los campesinos habían recibido armas también. Lo mismo que en México durante el período de Lázaro Cárdenas, el régimen se utilizó por los sindicatos armados para contrabalancear el poder de los militares profesionales, lo que también trató de hacer Perón en un momento desesperado que precedió a su caída. Es natural que semejantes medidas constituyan una amenaza evidente contra el orden interior y en México y en Argentina las Fuerzas Armadas han podido recuperar su monopolio como factor dentro de la sociedad. En Bolivia, en cambio, todavía se trata de mantener un balance precario entre un ejército reforma-

do de un lado, tropas policiales y milicias obreras del otro.

Pero también se puede tratar de un sistema de balance político dentro de las mismas Fuerzas Armadas o sea un balance entre los diferentes servicios de la defensa. No es un hecho peculiar para América Latina el que exista competencia entre estos servicios como Estados Unidos, por ejemplo, lo prueba. Pero ha llegado a ser una tradición política latino-americana bastante característica el que los diferentes servicios representen y apoyen alternativas políticas diferentes, a veces hasta producirse choques armados entre ellos. En países donde no solamente el ejército sino también la marina y la fuerza aérea forman entidades grandes, esto constituye un peligro verdadero. A fines del siglo pasado, las guerras civiles ocurridas entre ejército y marina en el Brasil y en Chile costaron mucha sangre. En general, los servicios más modernos o sea la marina y las fuerzas aéreas han sido más receptivos para alternativas políticas liberales y moderadas, que el ejército. Que las fuerzas armadas puedan mantener el orden sin embarcarse en la política es un ideal muy a menudo formulado pero raramente alcanzado en la América Latina. Hay que notar, sin embargo, que durante los últimos años ha sido gracias a la supervisión de las fuerzas armadas como se han realizado algunas de las elecciones políticas evitando así incidentes tumultuosos, de otra manera probablemente inevitables. En varios países, de acuerdo con las constituciones políticas, los miembros activos de las fuerzas armadas y de la policía, son exceptuados del deber del sufragio, lo que sin embargo no ha constituido una garantía efectiva contra la intervención política de los militares. En cambio, la responsabilidad política de las fuerzas armadas ha sido varias veces claramente formulada y definida. En la Constitución del Brasil otorgada por Vargas en 1937, se mencionó directamente que tenía el apoyo de las Fuerzas Armadas, reservando la mención del supuesto apoyo de la opinión pública para el segundo lugar. Ya medio siglo antes, el principal teórico del militarismo brasileño, Benjamín Constant Botelho de Magalhães, habló claramente del derecho indiscutible de las

fuerzas armadas a destituir a las autoridades públicas tan pronto como los militares encuentren que su honor lo requiera o lo consideran necesario para el bien del país.

Al lado de su función como mantenedor o perturbador del orden interior, las Fuerzas Armadas en América Latina, a partir de las guerras de Emancipación, han seguido cumpliendo más o menos conscientemente una función social importante. Fue al enrolarse en los ejércitos de la revolución que los esclavos negros pudieron conseguir su libertad. Por medio de su coraje o por intrigas hábiles hasta hombres procedentes de las capas más bajas de la sociedad y quizá de color bastante oscuro pudieron a veces alcanzar los puestos militares más altos. Sucedió más de una vez que soldados sencillos se abrieron camino hasta la silla presidencial. El sargento cubano Batista ofrece un ejemplo moderno de este fenómeno. Aunque el rango militar y el poder político ostentado por semejantes hombres nuevos no les abriera las puertas a los círculos más orgullosos de la alta sociedad, la carrera militar siempre ofreció una especie de atajo a un ascenso social para los elementos humildes. Al tratarse de países donde los límites sociales son tan agudos como lo son en América Latina en donde la pequeña clase superior ha podido siempre defender con bastante éxito su monopolio sobre la tierra, manteniendo su exclusividad social y su dominio político, la carrera militar, desde luego, constituía tal vez el mejor instrumento existente para una movilidad social. Sin embargo es evidente que los jefes militares de estirpe humilde a menudo se compraron un trato benevolento y tolerante por parte de la clase superior, al identificarse con sus intereses políticos reaccionarios.

No se han realizado investigaciones científicas de carácter estadístico en torno al reclutamiento social de los oficiales militares durante períodos diferentes y en cuanto a los diversos países latinoamericanos, lo que quiere decir que fue una movilidad social que ejerció poca influencia duradera. He tenido la oportunidad de observar durante un viaje reciente a América Latina que sería muy difícil, casi imposible, de realizar semejantes investigaciones con algún éxito y precisión. Ni siquiera en cuanto a la situación actual es fácil conseguir algunos datos. Se sabe, sin embargo, que entre los cadetes admitidos al Heroico Colegio Militar de México en 1955 un porcentaje elevado, o sea un 18 por ciento, procedían de la capa de obreros industriales y rurales, y algunos porcientos más de la categoría de mecánicos y de ferroviarios, pero hay que tener en cuenta que la gran Revolución Mexicana ha podido fomentar de una manera excepcional en cuanto a la América Latina se refiere, el proceso de movilidad social.

Al ser reformado el ejército boliviano después de la revolución de 1952, se fijaron cuotas oficiales en cuanto al reclutamiento social de la Academia Militar. Según estas normas, 20 por ciento de los cadetes debían ser hijos de campesinos, 30 por ciento hijos de mineros y de obreros industriales y 50 por ciento de familias pertenecientes a las clases medias que fueran de probada lealtad hacia el régimen. En realidad, parece que la procedencia de las clases medias es lo normal para los oficiales militares latinoamericanos. Pero el término de "clase media" significa una clasificación muy vaga, sobre todo en América Latina, y además existen, sin duda, modalidades

nacionales bastante considerables. Si consta que generalmente los jefes militares en América Latina procedieron de unas capas poco consideradas de la sociedad, esto ayuda a explicar la poca consideración social que suelen gozar los oficiales militares. Es esto un contraste contundente con las condiciones prusianas. Hay sin embargo diversas circunstancias que indican que durante los últimos tiempos los oficiales militares latinoamericanos han llegado a identificarse cada vez más con su ambiente familiar de las clases medias y que por lo tanto, los anhelos evidentes en el ambiente de la clase media de alcanzar formas políticas más democráticas, han sido también aceptados por un número cada vez más grande de oficiales militares. Con tal evolución sería posible explicar, por lo menos parcialmente, los cambios políticos ocurridos durante los últimos años.

La función social de las Fuerzas Armadas no se ha limitado, sin embargo, a los oficiales. No cabe duda de que también el entrenamiento de los reclutas ha tenido importancia educacional y ciudadana en países donde analfabetos primitivos han constituido gran parte de la milicia. Hasta la enseñanza más rudimentaria ha podido proporcionar a los reclutas muchos conceptos y datos de valor positivo. Tiene su interés en esta conexión que el partido Aprista peruano espera que uno de sus fines principales o sea la integración social de las poblaciones indígenas se podrá alcanzar con la ayuda de un verdadero ejército popular.

Tampoco hay que ignorar otro factor positivo del papel ejercido por las Fuerzas Armadas en los países latinoamericanos. A pesar de dedicarse tan frecuentemente a luchas internas, las Fuerzas Armadas han fomentado sin duda el concepto de una unidad nacional, de una tradición nacional. Al comenzar su existencia, los nuevos estados tenían un carácter bastante artificial. Fue por lo tanto el ejército quien, en primer lugar, representó a la Nación. En los países de inmigración como Argentina, y hoy día Venezuela, y en los países andinos con sus poblaciones indígenas, las Fuerzas Armadas han formado una especie de mediador entre el pasado y el presente; entre diversas regiones y razas. Es verdad que los oficiales han ejercido muchas veces esta función empleando una retórica exagerada, pero esto no constituye razón para menospreciar la importancia de esta misma función. Al mismo tiempo, no se puede ignorar tampoco que muchas veces las tensiones surgidas entre los diferentes países latinoamericanos han sido mantenidas y fomentadas por el nacionalismo o chauvinismo militar, siendo la causa de que bagatelas puedan crecer hasta constituir conflictos que han puesto en juego todo el prestigio de los países respectivos.

A pesar de que los armamentos de las Fuerzas Armadas en los países latinoamericanos han sido generalmente bastante anticuados siempre han resultado muy costosos para el Estado, exigiendo un porcentaje elevado de presupuestos estatales relativamente modestos. No ha sido excepcional el que 50 por ciento de los gastos del presupuesto, fuera reservado para gastos militares. En la Venezuela de Pérez Jiménez, el Ministerio de Defensa logró absorber un porcentaje cada vez más grande de los ingresos estatales, que al mismo tiempo estaban continuamente creciendo. En la actualidad parece que

los gastos militares en los Estados latino-americanos generalmente ocupan una cuarta y una quinta parte del presupuesto, pero esta también significa una carga financiera muy considerable, sobre todo al tratarse de la capacidad de un país menos desarrollado. Las compras de tanques y buques de guerra requieren divisas que hubieran podido ser mejor empleadas para compras de bienes de capital. Es evidente que los países vendedores no son enteramente inocentes de que se fuerzan las aspiraciones de los países menos desarrollados de una manera improductiva. Los suministros de armas británicas y noruegas al déspota cubano Batista ofrecen además un ejemplo elocuente de las consecuencias menos agradables que puedan tener semejantes transacciones para la política exterior e interior del país vendedor. Han sido, sin embargo, los Estados Unidos los que sobre todo han proporcionado a la América Latina grandes cantida-

V

¿Cómo podría evitarse las consecuencias negativas en el orden político y financiero de la posición preponderante de las fuerzas armadas en la América Latina? ¿Cómo sería posible reducir su posición dentro de la sociedad hasta tener proporciones razonables? ¿Cómo sería posible garantizar definitivamente el orden interior sin que los guardas mismos constituyan un riesgo y un peligro para la democracia? ¿Cómo, finalmente, habría que reformar la defensa nacional bajo la sombra de la guerra atómica y de los "missiles"? Son todas estas preguntas extraordinariamente difícil de contestar. Los nuevos estados de Sud-Asia y del Cercano-Oriente ofrecen una prueba más de que el militarismo surge fácilmente con aspiraciones reformistas en países menos desarrollados. Por lo demás, la preponderancia de las fuerzas armadas en semejantes países, no sólo se basa sobre la violencia, sino también sobre una capacidad de organización superior a la que otros factores sociales, salvo posiblemente la Iglesia, puedan ostentar. Al visitar algunas instituciones de investigación puestas bajo dirección militar he podido allí observar pruebas de un orden, de una diligencia y solidez no siempre encontradas en América Latina en instituciones parecidas, pero de carácter civil. Precisamente esta capacidad de trabajo constituye un potencial necesario de utilizar y es verdad que en América Latina los militares muchas veces se han encargado de tareas urgentes de carácter civil, por ejemplo, transportes aéreos civiles, la construcción de carreteras, y la organización de censos. El gobierno de Bolivia ha encomendado a su ejército reformado tratar de abrir el camino para la colonización de las bajas tierras tropicales, lo que al mismo tiempo mantiene ocupada la mayor parte del ejército a una distancia segura de la Capital.

Debemos finalmente subrayar que algunos países latino-americanos ya hace mucho tiempo han logrado reducir el tamaño y la influencia de las fuerzas armadas a proporciones razonables. En Costa Rica y en el Uruguay, las Fuerzas Armadas han sido casi hasta eliminadas en un interesante acción recíproca al proceso de democratización política. En México el ejército formado a base de las huestes victoriosas de la gran Revolución, constituía hasta hace unos veinte años, uno de los factores políticos más importantes, pero, a partir de esa fecha, su influencia ha ido declinando fuertemente. Los últimos

des de armas en parte ya anticuadas con el propósito más o menos justificado de fortalecer así la defensa del hemisferio occidental. Es además un hecho que un porcentaje bastante considerable de los recursos económicos puestos a la disposición de las Fuerzas Armadas ha podido ser gastado sin mejorar la efectividad de manera alguna. Se dice que la construcción del club militar en Caracas, bajo Pérez Jiménez, un hotel de lujo sin igual, ha costado más de 6 veces lo que el Estado venezolano gastó anualmente en seguro social. La intención fue convertir a los oficiales en parásitos de la sociedad entera. Por parte del gobierno en varios países latino-americanos, se han evidenciado tendencias a tratar de comprar la lealtad de los oficiales y también las de los soldados a través de aumentos de sueldos y de concesiones de diversas ventajas sociales.

presidentes de México ya no han sido generales sino abogados. Parece que en estos y algunos otros casos, el gobierno ha empleado con éxito el método de efectuar cambios frecuentes y sistemáticos en cuanto a los puestos más altos de la jerarquía militar. De esta manera, los generales han sido privados de la posibilidad de adquirir la lealtad y el apoyo de algún cuerpo o distrito especial. Pero también la divulgación de ideales más pacífico y más ciudadanos entre una opinión pública cada vez más vociferante ha sido la causa de la declinación del militarismo, haciendo posible una reducción de los gastos estatales para fines militares.

La defensa exterior y paz interna de América Latina ha sido garantizada a partir de 1947 por el llamado Pacto de Río de Janeiro. Un comité inter-americano de defensa, coordina las preparaciones de defensa. Hay varios países latino-americanos que se han interesado por el uso pacífico de la fuerza atómica, pero no se ha considerado de manera seria la adquisición de armas atómicas por ser tan enormemente costosas. En la OEA, el delegado de Costa Rica hizo en marzo de 1958 una intervención muy discutida. El delegado costarricense, Lic. Gonzalo Facio, tomó como punto de partida que los estados latinoamericanos debían realizar su situación económica menos desarrollada. Por lo tanto no se podía ni pensar en la adquisición de armas atómicas. Por otra parte, los armamentos convencionales de las fuerzas armadas latino-americanas tenían que resultar absolutamente anticuados en caso de una conflagración mundial. Los ahorros, en cambio, se podían invertir en el aprovechamiento de los recursos económicos de la América Latina, lo que constituiría una defensa mucho más efectiva contra el comunismo que unas tropas militares numerosas. Por lo demás, se debía poner el "énfasis en las funciones civiles de ingeniería y de obras públicas, creando o robusteciendo centros para el entrenamiento de los miembros de las fuerzas armadas en esas tareas civiles".

La base de esta proposición que como tal parecía tan bien justificada, era, sin embargo, que la América Latina transmitiera a su poderoso vecino del Norte el organizar a su gusto la defensa militar de las veinte repúblicas latino-americanas, lo que en cierto grado afectaría el concepto de soberanía.